LITORALPRESS

Fecha: 01-06-2025
Medio: La Tercera
Supl. : La Tercera
Tipo: Noticia general
Título: **Camino amarillo**

Pág. : 10
Cm2: 464,7
VPE: $ 4.623.475

Tiraje: 78.224
Lectoría: 253.149
Favorabilidad: No Definida

Camino amarillo

Por **Daniel Matamala**

No fue necesaria una ley, una institucionalidad rimbombante ni una nueva burocracia con edificios y sellos oficiales. Bastó que una contralora, Dorothy Pérez, tuviera la inteligencia para cruzar bases de datos, y la audacia para meterse en las patas de los caballos.

El resultado provoca asombro por su magnitud: 25 mil licencias pagadas a funcionarios públicos mientras se encontraban fuera del país.

En el detalle hay de todo: desprolijidades, frescuras, y casos sistemáticos de abuso en que personas llevan meses o años recibiendo dinero fiscal, con licencias truchas mientras viajan a su antojo fuera del país.

Verdaderos "ñoquis", como se conoce en Argentina a los empleados públicos que solo se aparecen por la oficina el día de pago (el 29, en que es tradición comer ñoquis).

Como es habitual, las primeras reacciones intentaron sacar provecho proselitista, pero pronto esa narrativa se desinfló. La truchería alcanza por igual al gobierno central, los municipios y organismos públicos. Hasta ahora, los casos más connotados son los de un exministro comunista y un alcalde republicano.

Más transversal, imposible. Los frescos y los corruptos no tienen color político.

A esta fiscalización seguirán más. Ya se anunció una a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que quedaron fuera de este primer catastro, e incluir viajes dentro del país.

El tema de fondo es la reforma del Estado. La oposición viene insistiendo hace años que esa reforma es necesaria, y estos datos le dan la razón. La coyuntura es favorable: si algo aprendió el Frente Amplio en esta primera experiencia en el poder real, es que una reforma es indispensable para llevar adelante políticas públicas efectivas. En La Moneda, en ministerios y en municipios, muchos frenteamplistas vocean su frustración por las rigideces de la administración pública. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, es uno de los más explícitos al respecto.

Esta reforma también es indispensable porque hoy un Estado ágil y efectivo es más necesario que nunca para enfrentar el enorme desafío que significa el crimen organizado. Este crece gracias a las economías ilegales. El narcotráfico, el tráfico de armas, la extorsión, el control territorial y la captación de soldados florecen en los bolsones de marginalidad y descontrol que deja la ausencia del Estado.

Por eso resulta preocupante que ganen terreno discursos que buscan debilitar e incluso destruir el Estado. Algunos imitan al jefe de Estado Javier Milei, quien se vanagloria de "odiar el Estado" y proclama su plan de "romperlo y destruirlo desde dentro".

Con una retórica similar, en Estados Unidos, Elon Musk asumió prometiendo cortar dos billones de dólares en gasto superfluo. Después de cuatro meses, dejó el cargo con un balance desastroso. Proclamó haber logrado apenas el 10% de su meta, e incluso esa cifra es cuestionada por los expertos. Musk y su equipo se dedicaron a destruir un sistema del que no entendían nada, enfocándose en destrozar programas que odiaban por razones ideológicas, y cometiendo múltiples horrores y errores en el camino.

Solo dos ejemplos: Musk proclamó haber descubierto un envío de 50 millones de dólares a Gaza para comprar preservativos para Hamás. En verdad, el envío (por mucho menos dinero, por cierto) era a la provincia de Gaza, en Mozambique, como parte de un programa de control del sida. También denunció que miles de personas de 150 años de edad estaban recibiendo dinero de la seguridad social. Ni él ni su equipo de genios sabían que el sistema codifica por defecto todas las fechas de nacimiento desconocidas con el año 1875.

Otra posición de moda es que, ante el despilfarro estatal, se deben reducir drásticamente los ingresos fiscales, cortando impuestos. Tanto en la pasada campaña constituyente como en esta presidencial se propuso eliminar las contribuciones a los bienes raíces.

Este es otro ejemplo de una idea desastrosa. Las contribuciones son uno de los impuestos más progresivos que tenemos, y eliminarlas sería una transferencia directa de riqueza, de los más pobres a los más adinerados. En Vitacura el 98% de los hogares pagan contribuciones. En comunas como Lo Espejo o Cerro Navia, no llegan al 5%.

Dos tercios de las contribuciones van al Fondo Común Municipal, del que dependen para su financiamiento las comunas más vulnerables del país. Gracias a ese dinero pueden pagar alumbrado público, funcionarios de seguridad ciudadana, pavimentación, multicanchas, programas de apoyo comunitario y capacitación a jóvenes.

En resumen, es gracias a ese dinero que el Estado puede existir en las zonas en que está peleando mano a mano con el crimen organizado. Reducir la presencia pública en ese lugar es regalárselo sin dar batalla.

El día en que se eliminen las contribuciones, los narcos tendrán justificadas razones para festejar con un carnaval de fuegos artificiales.

La respuesta a estos reparos suele ser que basta con eliminar la corrupción y el despilfarro para bajar los impuestos sin afectar el gasto social. Pero quienes lo dicen son los mismos que, cuando han tenido la oportunidad de gobernar, tampoco han podido acabar con estos problemas. Como lo muestra el fiasco de Musk, hablar de cortar el Estado es fácil. Hacerlo como se debe, para volverlo más eficiente y liviano, no lo es tanto.

La economista Jeannette von Wolfersdorff hace una importante acotación al respecto. Dice que tenemos que desburocratizar, pero no desregular. En un mundo tan complejo, las regulaciones juegan un rol fundamental. Pero esas regulaciones deben ser más livianas y flexibles, depender menos de leyes rígidas y más de organismos autónomos que puedan adaptarse a los cambios.

En este caso, siguiendo a Dorothy, debemos amarillear: irnos por el camino amarillo.

La derecha tiene razón en que es urgente reformar el Estado para limpiarlo de frescos y abusadores, y hacerlo más ágil, flexible y eficiente. La izquierda tiene razón en que necesitamos mejor Estado, no menos, para proteger bienes sociales y sentar presencia efectiva en todo el territorio.

Si el escándalo de las licencias sirve para construir ese consenso, habremos dado un enorme paso, en un momento crucial para nuestra sociedad.